

informativo@attac.org http://attac-info@blogspot.com/
Nº 441 24 de marzo de 2008

Estrategia continental

Sumario

Mundo

EL DALAI LAMA CRITICA EL GENOCIDIO CULTURAL DE CHINA

El Gobierno Chino, que desde los años 90 recibe el estricto asesoramiento de los "Chicago Boys", el FMI y el Departamento de Estado norteamericano, ha puesto a todo el inmenso país en alerta militar. Por tercer día consecutivo, un gran despliegue policial controla hoy Lhasa aunque las protestas se han trasladado a las ciudades limítrofes.

Tras haber vivido los peores disturbios desde hace dos décadas, el Gobierno chino parece haber sofocado prácticamente la "Revuelta Azafrán" protagonizada por los monjes budistas del Tíbet, que reclaman la



independencia de esta región que fue ocupada por el Ejército Popular de Liberación en 1950 y anexionada un año después. Mientras tanto, el Dalai Lama ha calificado la actidud china de "genocidio cultural" aunque apoya que los Juegos Olímpicos se celebren este verano en Pekín.

El Gobierno Chino, que desde los años 90 recibe el estricto asesoramiento de los "Chicago Boys", el FMI y el Departamento de Estado norteamericano, ha puesto a todo el inmenso país en alerta militar. Una plutocracia formada por hijos y familiares de los máximos dirigentes del PC controla fortunas inmensas, mientras las multinacionales occidentales han convertido a este país en una factoría mundial, utilizando mano de obra prácticamente esclava.

Aunque las agencias internacionales informaron ayer que se habían registrado violentas protestas en la provincia sureña de Sichuan, en las que incluso podría haber fallecidos, la calma reinaba este domingo en la capital del Tíbet, Lhasa, y en Xiahe, una ciudad de Gansu que se ha convertido en uno de los principales focos de este levantamiento.

No así en otras partes del mundo, ya que se han sucedido múltiples manifestaciones. Desde Bruselas donde un grupo de tibetanos quemaron banderas chinas a Holanda, pasando por Taiwan y, sobre todo, en el norte de India donde las manifestaciones fueron de miles de tibetanos exiliados, los actos de repulsa se han producido por todo el mundo. Japón pidió ayer contención tanto para el Gobierno chino como para los manifestantes del Tibet recomendando "que no se extiendan los disturbios".

A la vez de estos actos de condena, en Lhasa, origen del conflicto, el despliegue militar se convierte en una búsqueda casa por casa de los participantes en las manifestaciones del viernes. El propio gobernador del Tíbet, Qiangba Puncog, ha advertido de que se enfrentan a un "severo castigo" si no se rinden.

El Dalai Lama pidió ayer que una investigación internacional aclare la represión del régimen neocapitalista chino, que según sus estimaciones se ha cobrado 80 muertos. Por ese motivo, el Dalai Lama acusó a Pekín de imponer el "imperio del terror" y de llevar a cabo un auténtico "genocidio cultural". Sin embargo, sobre la cita con el deporte en Pekín este verano afirmó: "Quiero esos juegos. Los chinos necesitan sentirse orgullosos por ello. China se merece ser anfitrión de los Juegos Olímipos".

Las reacciones a favor de la cita olímpica tuvieron ayer también su eco en España, según informa Colpisa. "El problema que hay en China existe, está ahí, pero no hay ninguna duda de que, debido a los Juegos y después de los Juegos, el tema de los derechos humanos en China habrá dado un avance gigantesco", asegura Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE)
.
Ayer sólo algunos deportistas se referían a la posibilidad del boicot y como una hipótesis lejana. "Me he preguntado si debía competir en China en estas condiciones. Seguramente hablemos de esta cuestión en nuestra reunión en Dortmund", decía el jinete alemán Ludger Beerbaum.

"Muchas estrellas del deporte se ponen enfermas al pensar en los Juegos Olímpicos. Algunos incluso piensan en anular su participación", admitía Thomas Bach, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y presidente del Comité Olímpico Alemán (DOSB). Por otra parte, la triatleta suiza Magali Di Marco-Messmer, medallista de bronce en Sidney 2000, afirmó al periódico 'Le Matin Dimanche' de Ginebra: "Si los boicoteara Roger Federer, puede que tuviera impacto. Pero, si lo hago yo, pasará desapercibido".

La Policía china visita a los pocos extranjeros alojados en hoteles de Xiahe, entre ellos el corresponsal de este periódico, para invitarlos a marcharse y regresar cuando haga una mejor climatología. "Mejor vuelva en verano, que hace un tiempo más agradable, la hierba está más verde y hasta las mujeres están más guapas, por lo que podemos presentarle a una tibetana que quizás no sea demasiado bella de cara, pero que tendrá un corazón apasionado y le amará para toda la vida", concluyó con las mejores maneras posibles la que, posiblemente, sea la expulsión más amistosa y divertida que jamás he escuchado.
La relajación de la charla continuó cuando les conté que tenía previsto marcharme muy temprano a la mañana siguiente (por hoy), pero que, desde luego, le tomaba la palabra a tan suculenta invitación para el verano.

Similar visita, aunque supongo que con una invitación menos generosa, recibió también una periodista francesa alojada en el mismo hotel, que ayer las pasó canutas hasta llegar a Xiahe. Tras ser detenida en



uno de los numerosos controles montados en las carreteras para impedir la entrada de reporteros extranjeros, había dado un largo rodeo por las montañas y hasta había vadeado un río para alcanzar el "epicentro" de la noticia. Demasiada aventura como para enterarse ahora de que ésta no es la época buena del año y de que es mejor volver en verano.

Agencia Digital Independiente de Noticias
http://agenciadin.com.ar

EL TRIPLE PECADO DE LA GRAN BANCA PRIVADA

Eric Toussaint, Damien Millet

Desde agosto de 2007, los bancos estadounidenses y europeos se encuentran bajo los focos de la actualidad debido a la grave crisis que padecen, y que hacen padecer a todo el sistema neoliberal en bloque. El monto actual de la devaluación de activos que se vieron obligados a efectuar supera los 200.000 millones de dólares. Diversos servicios de estudio de los bancos y experimentados economistas consideran que la factura superará el billón de dólares (1.000.000.000.000 USD) [1].

¿Cómo han podido los bancos construir tal montaje de deudas tan irracional? Los organismos de créditos hipotecarios concedieron préstamos a un sector de la población ya fuertemente endeudado. Las condiciones de estos préstamos, de alto rendimiento (para el prestamista), constituyen una auténtica engañifa: el tipo es fijo y razonable durante los primeros dos años, pero luego sufre un fuerte aumento. Los prestamistas afirmaban a los clientes que el bien que adquirían con el préstamo se valorizaría en poco tiempo dado el aumento de los precios en el sector inmobiliario. El quid de la cuestión es que la burbuja inmobiliaria finalmente estalló en el 2007, y los precios comenzaron inexorablemente a bajar. Como el número de impagos tuvo un considerable crecimiento, los organismos de crédito hipotecario comenzaron a verse en dificultades para reembolsar sus deudas. Para protegerse, los grandes bancos se niegan a conceder nuevos préstamos o prestan a un interés mucho más alto. Pero la espiral no se detiene allí, porque los bancos habían comprado un gran volumen de acreencias hipotecarias, y en gran parte fuera de balance, creando unas sociedades específicas llamadas Structured Investment Vehicles (SIV), las que financiaban la compra de deuda hipotecaria de alto rendimiento, transformadas en títulos (CDO, Collateralized Debt Obligations).

A partir de agosto de 2007, los inversores dejaron de comprar los "commercial papers" emitidos sin garantía por las SIV, la salud y la credibilidad de los cuales estaban muy deterioradas. En consecuencia, las SIV se quedaron sin liquidez para comprar los créditos hipotecarios titularizados, con lo que se amplió la crisis. Los grandes bancos que habían creado las SIV tuvieron que asumir los compromisos de éstas para evitar que quebraran. Mientras que hasta entonces las operaciones de las SIV no figuraban en su contabilidad (lo que les permitía disimular los riesgos asumidos), tienen ahora que incluir en sus balances las deudas de las SIV.

Resultado: ¡Pánico a bordo! En Estados Unidos, 84 sociedades de crédito hipotecario han quebrado o cesado parcialmente su actividad entre el 1º de enero y el 17 de agosto de 2007, mientras que en todo el año 2006 fueron sólo 17. En Alemania, el banco IKB y la institución pública Sachsen LB fueron salvados a último momento. Recientemente, Inglaterra tuvo que nacionalizar el banco Northern Rock, en bancarrota. El 13 de marzo de 2008, la Carlyle Capital Corporation (CCC), cuya proximidad declarada al clan Bush es bien conocida, se desmoronó: sus deudas representaban 32 veces sus fondos propios. Al día siguiente, el prestigioso banco estadounidense Bear Stearns (5º banco de negocios de Estados Unidos), falto de liquidez, pidió ayuda a la Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed) para obtener una financiación de urgencia. Será comprada por el banco JP Morgan Chase a precio de ganga.

Varios segmentos del mercado de la deuda constituyen construcciones endebles en vías de derrumbarse. Arrastran en su fracaso a los poderosos bancos, a los "hedge funds", a los fondos de inversión que las habían creado. El salvamento de las instituciones financieras privadas se lleva a cabo gracias a la intervención masiva de los poderes públicos. La privatización de los beneficios, la socialización de las pérdidas son una vez más la solución del problema.

Pero se impone una pregunta: ¿Por qué los bancos, que ahora no vacilen en anular unas deudas dudosas de decenas de miles de millones de dólares, siempre se han negado a anular las deudas de los países en desarrollo? Están demostrando que esto es perfectamente posible y absolutamente necesario. Recordemos que en el origen de las deudas actuales, cuyo pago reclaman los bancos a estos países, se encuentran unas dictaduras criminales, unos regímenes corruptos, unos dirigentes fieles a las grandes potencias y a los acreedores. Los grandes bancos han prestado sin miramientos a regímenes tan poco recomendables como los de Mobutu en el Zaire, de Suharto en Indonesia, a las dictaduras latinoamericanas de los años 1970-1980, amén del régimen del apartheid de Sudáfrica. ¿Cómo pueden continuar infligiendo el yugo de la deuda a unos pueblos que han sufrido unos regímenes dictatoriales que ellos mismos financiaron? En el plano jurídico, son numerosas las deudas odiosas que figuran en sus libros de contabilidad y que no deben ser pagadas. Pero los bancos continúan exigiendo su reembolso.

Así mismo, recordemos que en 1982 la crisis de la deuda del Tercer Mundo fue provocada por el alza desmedida y unilateral de las tasas de interés decidida por la Fed. Antes de esto, los bancos privados habían impuesto préstamos a tasa variable a unos países ya sobreendeudados, que finalmente fueron incapaces de afrontar. En estos momentos, la historia se repite, pero esta vez en el Norte y de una manera específica: los hogares sobreendeudados de Estados Unidos se encuentran en la incapacidad de devolver su deuda a plazo variable porque la burbuja ha estallado.

Las anulaciones de deuda que realizan los bancos dan la razón a todos los que, como el CADTM, reivindican la anulación de la deuda de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque la deuda a largo término de los poderes públicos del Tercer Mundo con los bancos internacionales llegaba a los 181.900 millones de dólares en el 2006 [2]. Desde agosto de 2007, han tenido que anular una suma muy superior, y esto no ha acabado...

Los grandes bancos privados han pecado tres veces:

- construyeron unos montajes desastrosos de deuda privada que han llevado a la actual catástrofe;
- prestaron a las dictaduras y obligaron a los gobiernos democráticos que las sucedieron a reembolsar con creces hasta el último céntimo de una deuda odiosa;
- se niegan a anular la deuda de unos países en desarrollo, a pesar de que su reembolso implica el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones.

Por todas estas razones, es necesario exigir que rindan cuentas de sus maniobras en el curso de las últimas décadas. Los gobiernos de los países del Sur tienen que llevar a cabo auditorías de su deuda, como hace actualmente Ecuador, y repudiar todas sus deudas odiosas e ilegítimas. Los banqueros demuestran que esto es perfectamente posible. Se trataría del primer paso para hacer que las finanzas desempeñen el papel que les corresponde, el de una herramienta al servicio del ser humano. De todos los seres humanos. (Traducción: Griselda Pinero y Raul Quiroz)

- Damien Millet, portavoz del CADTM Francia (Comité para la Anulación de la Deuda Pública del Tercer Mundo, www.cadtm.org, autor de Africa sin deuda, Icaria, Barcelona, 2008.
- Eric Toussaint, presidente del CADTM Bélgica, autor de Banco del Sur y nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Barcelona, 2008 y Abya Yala, Quito, 2008

Notas:
[1] El servicio de estudio de Goldman Sachs evaluaba, el 7 demarzo de 2008, las pérdidas en 1,156 billones de dólares; George Magnus, de UBS, adelantaba en febrero una cifra superior al billón; Nouriel Roubini, de la Universidad de Nueva York, emitía la hipótesis de una pérdida de al menos un billón de dólares. (Ver http://www.rgemonitor.com/blog/roubini)
[2] Banco Mundial, Global Development Finance 2007

Más información: http://alainet.org

Latinoamérica

HISTORIA, POLÍTICA Y DEMANDAS MAPUCHES

Augusto Samaniego Mesías*

En la Independencia y al inicio de la República, durante un tiempo breve se ensalzó al pueblo araucano y sus virtudes para frenar el coloniaje español.



Durante el resto del siglo XIX, en cambio, las clases económicas y políticas dirigentes impusieron el dogma de que construir Chile obligaba a someter por las armas a ese pueblo mapuche y a reducirlo en estrechas tierras de menor valor. Esto generó el minifundio y la miseria para ellos y la acumulación de capital para algunos no mapuches privilegiados entre quienes recibieron tierras del Estado.

Indígenas y otros campesinos pobres fueron víctimas, además, de compras de predios, muchas veces bajo fraude o presión. En total, al comienzo de ese proceso unas 4,5 millones de hectáreas quedaron en manos de propietarios privados no mapuches. En contraste, el Estado asignó sólo cerca de medio millón de hectáreas entre miles de comunidades indígenas. Hoy, distintos estudios indican que desde la sociedad civil crece la preocupación por un trato justo de parte del Estado ante las demandas mapuches.

Es innegable que ellas se derivan esencialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y la OEA, entre otras instancias gestoras del derecho internacional moderno.

El Estado chileno ha sido incapaz de ratificar el Convenio 169 del sistema de Naciones Unidas (OIT), a pesar de los compromisos adquiridos por la Presidenta. La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU (13/09/07) y firmada por Chile se hace entonces prácticamente inaplicable.

Poderosos grupos de interés agitan el fantasma de una inexistente intención mapuche de romper con el Estado. Y aunque no se conocen planteamientos mapuches separatistas, se habla y se escribe sobre la preocupación -de quienes se autoproclaman auténticos patriotas- por preservar el territorio y la unidad nacional chilena.

La verdad es que son esos mismos sectores político-empresariales los que dividen el país entre los indígenas y los no-indígenas, entre chilenos mansos y ciudadanos que defienden sus derechos sindicales, sociales, económicos y políticos, en general. Para ello, machacan en la prensa escrita que es propiedad de un par de consorcios, en la TV privada y en muchas radios, que los indígenas son insaciables, que frenan "el progreso" (sus ganancias), que actúan como títeres de "agitadores marxistas". Intentan, así, inocular en la opinión pública un sentimiento de temor ante "el alzamiento mapuche", tal como lo hicieran "los patrones de Chile" desde la Colonia y durante los dos siglos de República.

En estos días llegan a acusar al Gobierno y a la Iglesia de "atentar contra la Constitución", simplemente por haber facilitado el fin de la huelga de hambre de una mujer mapuche encarcelada como "terrorista". Parecen empecinados en usar el Estado -como bajo la dictadura de la cual disfrutaron- para aterrorizar a los ciudadanos que se movilizan tras reivindicaciones sociales.

En contradicción con lo declarado en el seno de la ONU, el Estado sigue denegando derechos colectivos a los indígenas para ejercer gestión o cogestión económica, social, ambiental y cultural sobre sus territorios ancestrales, o formas de autonomía política vinculadas a su vida en esos territorios. Ello ha llevado a que Chile integre la minoría de países de América Latina que no cuenta con un reconocimiento de los pueblos indígenas o del carácter pluriétnico y multicultural en su carta fundamental.

La negación jurídica de derechos indígenas se manifestó cuando el Legislativo rechazó el débil concepto de territorialidad indígena que se incluía en el proyecto de Ley de 1993 y junto con ello eliminó todo derecho sobre los recursos naturales presentes en dichos territorios ancestrales: aguas, bosques, minerales, pesca en riberas y en el litoral oceánico.

Todos ellos conforman el hábitat de la existencia histórica, y la fuente de la sobrevivencia presente y futura de las culturas e identidades indígenas. Es en esos territorios que se han instalado megacapitales o megalatifundios que obtienen megaganancias de las industrias forestal, de celulosa, hidroeléctrica, salmonicultura o pesca industrial.

La derecha quiere que Chile dé la espalda al mundo y a la democracia moderna. Niega sistemáticamente la posibilidad y necesidad de convivencia, en la justicia y el respeto de la identidad y los derechos autonómicos apropiados de los pueblos originarios en el seno de un Estado pluricultural.



Alfonso Reiman, presidente de la Asociación Ñankucheu, de Lumaco, dijo: "¿Será legal y justo que las empresas forestales exterminen grandes extensiones de árboles nativos? ¿Será justo que una persona como Angelini tenga 500 mil hectáreas y nosotros los mapuches que somos 1,5 millones tengamos sólo 300 mil hectáreas?".

La criminalización de los movimientos de demandantes de tierra y otros derechos mapuches opera, desde 1991, mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista impuesta en 1984.

La tendencia ha sido aplicar altas penalidades para desacreditar y amedrentar a actores mapuches. Las sentencias judiciales dependen, en buena medida, de lo declarado por testigos sin rostro, que permanecen anónimos.

Las atribuciones otorgadas a la Corte Marcial han torcido juicios justos de "agentes del Estado", por ejemplo, en el caso de la muerte por disparo de alto calibre del joven mapuche Alex Lemún. Hoy, lamentamos la muerte por bala policial del joven Catrileo, estudiante mapuche, y las circunstancias de la investigación llevan a la presunción de uso indebido de la fuerza.

Ante tal tipo de contextos, el relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, recomendó oficialmente: "Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones o comunidades indígenas. No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (`amenaza terrorista', `asociación delictuosa') a hechos relacionados con la lucha social por la tierra...".

Pese a ello, cerca de 300 mapuches han sido acusados judicialmente en la Araucanía desde 2000 por demandar en favor de sus comunidades, y aproximadamente 10% de ellos fueron imputados de "terrorismo".

Es evidente: por sus intereses económicos y políticos, la derecha quiere que Chile dé la espalda al mundo y a la democracia moderna. Niega sistemáticamente la posibilidad y necesidad de convivencia, en la justicia y el respeto de la identidad y los derechos autonómicos apropiados de los pueblos originarios en el seno de un Estado pluricultural.

El propósito recurrente en el discurso político-estatal respecto de los indígenas reza "integración con identidad". Mientras se niegue el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos indígenas equivalentes, igualándolo, al menos, a los consensos y normas internacionales actuales, y éstas realmente sean implementadas, las políticas vigentes tenderán a integrar museificando y folclorizando aspectos de las costumbres indígenas en desmedro de la identidad.

La declaración emitida por un número significativo de historiadores -académicos de relevantes universidades- llama a la ciudadanía a pensar, entender y actuar con el propósito de que las demandas indígenas sean respondidas y se avance en la perspectiva democrática y la cabal responsabilidad respecto del respeto a los derechos humanos que hoy relevan los derechos colectivos indígenas.

*Historiador, Universidad de Santiago de Chile.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080212/pags/20080212182343.html

---

ESTRATEGIA CONTINENTAL

Boaventura de Sousa Santos

Acerca de la incursión del ejército colombiano en territorio de Ecuador, para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, parece estar todo dicho; más aún si aparece como un caso cerrado, exitosamente cerrado. Pero la verdad es que no es así. Lo que se revela sobre la situación es tan importante como lo que se oculta.

Primer ocultamiento: los procesos políticos en América latina cuestionan el control continental que EE.UU. necesita para garantizar el libre acceso a los recursos naturales de la región. Se trata de una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. que, ante el fracaso inminente de las respuestas "consensuadas" (libre



comercio y concesiones para las bases militares), busca tener una respuesta firme y unilateral. Es decir, la guerra global contra el terrorismo llega al continente –llegó con el Plan Colombia pero la incursión en Medio Oriente provocó algún atraso– y asume aquí las mismas características que ha adquirido en otros continentes: utilizar un aliado privilegiado (sea éste Colombia, Israel o Pakistán), a quien a lo largo del tiempo se provee con la ayuda militar e información de espionaje sofisticado que lo pone al abrigo de represalias y le permite acciones dramáticas de bajo costo y un éxito certero; se incita al aliado al aislacionismo regional como precio a pagar por la alianza hegemónica.

La guerra contra el terrorismo incluye acciones muy visibles y otras secretas. Entre las últimas están los actos de espionaje y de desestabilización; Bolivia, Venezuela, la triple frontera (Paraguay, Brasil, Argentina) son los blancos privilegiados. En Bolivia, becarios norteamericanos de la Fundación Fulbright son llamados por la Embajada de EE.UU. para dar información sobre la presencia de cubanos y venezolanos y movimientos indígenas sospechados; mientras, los separatistas extremistas de Santa Cruz son entrenados en la selva colombiana por los paramilitares. Nuevos hechos: en las acciones de desestabilización pueden participar empresas militares y de seguridad privada, contratadas por EE.UU. bajo el paraguas del Plan Colombia que, además, las dota de inmunidad diplomática y por lo tanto impunidad ante la Justicia nacional.

Segundo ocultamiento: la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. De hecho, la permanencia de las FARC es fundamental para mantener la justificación de la guerra contra el terrorismo y generar un clima de miedo y una lógica bélica que bloquea el ascenso de las fuerzas progresistas, denominadas Polo Democrático de Colombia.

Por la misma razón, la intervención humanitaria a favor de los rehenes tuvo que ser desmantelada para que no obtuviera rédito político Hugo Chávez. Las fuerzas políticas progresistas amenazan la dominación territorial de EE.UU. a través de medidas que buscan fortalecer la soberanía de los países sobre los recursos naturales y alterar las reglas de la distribución de los beneficios de su explotación.

Pero la mayor amenaza proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde están esos recursos, o sea, de los pueblos indígenas. En relación con esto es elocuente el informe Tendencias Globales-2020, producido por el Consejo Nacional de Información de EE.UU., sobre los escenarios de amenaza a la seguridad nacional del país. En el informe se afirma que las reivindicaciones territoriales de los movimientos indígenas "representan un riesgo para la seguridad regional" y son uno de los "factores principales que determinarán el futuro latinoamericano". Tomando como ejemplo las luchas indígenas de Chiapas, Ecuador, Bolivia, Chile y sur de Argentina, se dice que "en el inicio del siglo XXI existen grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos que en 2020 podrán crecer exponencialmente, obteniendo la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas... Estos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización... que cuestionarán las políticas económicas de los liderazgos de origen europeo".

A la luz de esto no sorprende que el presidente del Perú se pregunte "si no habrá una internacional terrorista en América latina". Tampoco sorprende que actualmente centenares de líderes indígenas de Perú y de Chile hayan sido imputados al abrigo de leyes antiterroristas promulgadas en estos y otros países (por presión de EE.UU.) por defender sus territorios. La estrategia queda entonces delineada: transformar a los movimientos indígenas en la próxima generación de terroristas y, para enfrentarlos, seguir las recetas señaladas en el informe: tolerancia cero, refuerzos para gastos militares, estrechamiento de las relaciones con EE.UU. La responsabilidad de las fuerzas políticas progresistas es lograr que esta estrategia fracase.

www.panamaprofundo.org
Correo-e: contacto@panamaprofundo.org

CHILE. PROTESTA CONTRA LA VISITA A CHILE DE CONDOLEEZZA RICE

Organizaciones del Foro Social Chile entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet este viernes en el Palacio de La Moneda para manifestar su repudio a la presencia de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, cuyo gobierno completa 5 años de intervención en Irak, contraviniendo determinaciones de organismos multilaterales como la ONU.

Presidenta
Michelle Bachelet

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes de esta carta, integrantes del Foro Social Chile, nos dirigimos a usted a fin de manifestarle nuestra opinión de repudio por la visita a nuestro país, que iniciará dentro de pocas horas, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos Condoleezza Rice.

Nuestro repudio se funda en la insistencia de la actual administración Bush de sostener una política de agresión criminal y sometimiento hacia otros pueblos. Así ocurre hoy en Irak, donde dentro de seis días se cumplirán cinco años de la invasión estadounidense que ha significado la destrucción casi completa de ese país y más de un millón de muertos iraquíes. Dicha guerra significa también para el pueblo estadounidense la muerte de casi 4.000 de sus soldados y decenas de miles heridos o inválidos.

Lo que ocurre hoy en Irak es la consecuencia de la política estadounidense de la "guerra preventiva" y la lucha contra el terrorismo, que usando falsas pruebas justificaron la invasión a ese país. Esta misma política es la que ha alentado al gobierno colombiano, con evidente apoyo de EEUU, a violar la soberanía territorial del hermano pueblo de Ecuador, repitiendo con Colombia el rol que juega Israel en el Medio Oriente.

Desde antes del inicio de la guerra, miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país agrupados en la Plataforma por la Paz, nos movilizamos contra la posible guerra y exigimos que Chile se opusiera a ella en el seno de la ONU, lo cual ocurrió a pesar de las inmensas presiones del gobierno de Bush. Iniciada la guerra las movilizaciones se incrementaron en Chile y en el mundo convocadas por el Foro Social Mundial. En Santiago, millares de personas -convocadas por el Foro Social Chile- repudiaron la visita del presidente estadounidense George Bush cuando asistió la cumbre de la APEC del 2004.

Recordamos todos estos antecedentes a usted Presidenta y a la ciudadanía en general, para instarle a mantener una actitud firme ante la Secretaria estadounidense, sostener la posición chilena a favor de la paz, el rechazo al militarismo estadounidense y de sus aliados, y de firme sostenimiento del derecho internacional y fortalecimiento de los organismos multilaterales, pasados a llevar por la política que representa la señora Rice.

Queremos demandarle Presidenta, que su gobierno desarrolle una política más independiente de los intereses estadounidenses, de repudio activo a su política criminal y de mayor coordinación e integración con países y pueblos latinoamericanos.

Firman: Asociación de Inmigrantes por la Integración latinoamericana y del Caribe. APILA Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN,Amerindia, Chile Sustentable, Corporación La Caleta, Centro Ecuménico Diego de Medellín. Corporación. La MoradaComisión Ética Contra la Tortura. Attac. Red Chilena por la Reducción de Daños, Revista "Reflexión y Liberación", Movimiento Aquí la Gente, Le Monde Diplomatique, Coalición Internacional del Habitat, nstituto Jorge Ahumada, Casa Taller La Covacha Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Con A.L., Fundación Terram, Amerindia, Fundación Cenda, Comité de Derechos Humanos Kamarikun

---

LA CONSULTA POPULAR QUE FRENÓ EL PROYECTO MINERO

A lo largo del sábado 22 de marzo se realizó un foro de asambleas de Chubut, Mendoza, La Rioja, Santa Cruz y también de Gualeguaychú junto a organizaciones que las acompañan. El domingo 23, fecha del aniversario, se reúne la Asamblea Patagónica contra el Saqueo y la Contaminación, se hace un festival musical y posteriormente una marcha.

El pasado fin de semana se realizaron en esta ciudad una serie de eventos para celebrar el 5to. Aniversario de la histórica consulta popular del 23 de marzo de 2003, en la cual triunfó con el 81% de los votos de la población el NO al proyecto minero de oro y plata en el Cordón Esquel.

La movilización social de esta comunidad junto a otras de la provincia en contra de proyectos de minería a gran escala, motivó reacciones en el plano político-institucional local y nacional pero también en numerosas comunidades con situaciones equivalentes.



Sin proponérselo, se inició un camino de frontal oposición a estos proyectos en 14 provincias y involucrando a casi un centenar de localidades. En todas definen a la minería metalífera no solo como perjudicial para el medio ambiente, sino como un saqueo liso y llano de los bienes naturales y una inaceptable entrega de los recursos fiscales del país manos de empresas mineras mayoritariamente trasnacionales.

Esto último es posible gracias a un conjunto de leyes con vergonzosos beneficios fiscales, arancelarios y territoriales sancionadas en la década del noventa, que son repudiadas por todas las comunidades que luchan. Además el gobierno nacional de Néstor Kirchner y ahora también el de su esposa, Cristina Fernández, sostiene que la actividad minera es política de estado y articula el gerenciamiento de los intereses del sector desde los ministerios.

La explotación minera metalífera está prohibida pero…

A pesar del triunfo contundente del NO en la consulta popular del 2003, los vecinos de Esquel continúan marchando todos los días 4. Es que la minera canadiense Meridian Gold, que en el 2007 fue comprada por Yamana Gold, a suspendido sus actividades pero aún tiene la concesión legal del yacimiento que lo dio la provincia y la habilitación comercial municipal.

Como consecuencia del resultado de la consulta popular se sancionó una ley prohibiendo en todo Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de tóxicos, sin embargo, varias exploraciones metalíferas se concretan en la meseta chubutense que es la región más árida.

Entre tanto funcionarios del gobierno de Mario Das Neves manifestaron que se pretende habilitar la mayor parte del territorio para la actividad minera a gran escala. Esta intención es catalogada por las comunidades que la rechazan como un fraccionamiento de la provincia para establecer “zonas de sacrificio” a favor de las mineras.

BALAS DE PAPEL
Silvia Ribeiro

El 4 de marzo del 2008, más de 800 mujeres de la Vía Campesina Brasil invadieron la Fazenda Tarumã, en Río Grande do Sul, Brasil, una hacienda de 2100 hectáreas dedicada al monocultivo de árboles para la empresa papelera sueco-finlandesa Stora Enso, la segunda empresa más grande del rubro a nivel mundial. Desde la mañana, comenzaron a arrancar eucaliptos y plantar árboles nativos, en protesta por el avance vertiginoso de estos "desiertos verdes" en el país. La gobernadora del estado, Yeda Crusius, rápida en defender los intereses de la empresa, envió a la Brigada Militar, que con lujo de violencia y disparando balas de goma contra las ocupantes, hirió a más de 50 personas y detuvo a la mayoría, que fueron encerradas en un estadio deportivo.

La gobernadora tiene intereses propios en esta salvaje acción, ya que las principales papeleras que están haciendo estragos plantando miles de hectáreas de monocultivos en el estado (Aracruz Celulosa, Stora Enso y Votorantin Papel y Celulosa) han realizado "contribuciones" a su gobierno por más de 300 millones de dólares, según denunció el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), basado en documentos públicos del Tribunal Superior Electoral de ese país.

Anteriormente,Vía Campesina Brasil había denunciado que esta propiedad era ilegal, al encontrarse dentro de los 150 kilómetros de la frontera con Uruguay. Según la ley brasilera, los extranjeros no pueden poseer tierras en esta franja fronteriza. Stora Enso intentó hacer la compra a través de su subsidiaria Derflin, pero le fue denegado, justamente por ser extranjera. Ante esto creó una empresa fachada, la agropecuaria Azenglever, de propiedad de los brasileños João Fernando Borges y Otávio Pontes (director forestal y vicepresidente de Stora Enso para América Latina), actualmente dos de los mayores latifundistas del estado. Azenglever ya posee cerca de 50 haciendas y más de 45,000 hectáreas, pero pretende extender sus plantaciones a 100,000 hectáreas.

Como declaran las mujeres de Vía Campesina, "Nuestra acción es legítima, Stora Enso es la ilegal. Plantar este desierto verde en la faja fronteriza es un crimen contra la ley de nuestro país, contra el ecosistema y contra la soberanía alimentaria de nuestro estado que cada vez tiene menos tierras para producir alimentos". Explican también que aunque han denunciado repetidamente esta situación de evidente



abuso legal, las autoridades no actúan en consecuencia. Esta acción forma parte de una multiplicidad de protestas realizadas por mujeres de Vía Campesina de todo Brasil en el marco del 8 de marzo, día mundial de las mujeres, contra monocultivos de árboles y caña de azúcar, contra la liberación de maíz transgénico y otras políticas de las multinacionales de los agronegocios.

En el año 2006, cientos de mujeres invadieron una plantación de la empresa Aracruz, para denunciar la situación de atropellos que practican estas empresas, que en varias partes del país han desplazado a miles de integrantes de comunidades indígenas, campesinas y quilombolas, directamente o a través de la contaminación de aguas y suelos que provocan debido al alto uso de agrotóxicos y a la eliminación de muchos recursos forestales, de fauna y flora, que son depredados dentro y alrededor de las plantaciones.

El argumento que arguyen las empresas y gobiernos que las apoyan, para justificar este modelo de enormes monocultivos de árboles que avanza como un cáncer en muchos países del tercer mundo arrasando comunidades y ecosistemas, es la "necesidad" de producir celulosa para la demanda creciente de papel. Ahora se suma también el empuje de esos monocultivos como materia prima de agrocombustibles. En ambos casos, subyace la amenaza de las empresas de que para producir más es necesario usar árboles transgénicos.

Es importante en este contexto notar quiénes y para qué se consume papel en el mundo, justificación de las tropelías de las grandes papeleras y fábricas de celulosa, incluyendo ataques armados de parte de los gobiernos "de papel" que las secundan

Según Chris Lang e informes difundidos por el Movimiento Mundial de Bosques (www.wrm.org.uy), el consumo global de papel por cabeza en 1961, era de 25 kilogramos, mientras que al 2005 había saltado a 54 kilos. Estas cifras ocultan que mientras que los países industrializados del Norte consumen 125 kilos por persona en promedio, en los países del Sur apenas llega a 20 kilos por persona. También el promedio en los países del Norte oculta desigualdades: Finlandia (el mayor consumidor de papel per cápita en el mundo) consume 334 kilos por persona, Estados Unidos 312 y Japón 250. En China, el consumo de papel por persona en 1960 era de 4 kilos y al 2005 alcazaba 44 kilos. Pero la mayor parte del papel utilizado en China se usa en embalajes de productos que se exportan al resto del mundo, principalmente Europa, Japón y América del Norte.

Justamente, la mayor parte del consumo global de papel se va en propaganda y en embalajes, cuyo uso se proyectó exponencialmente tanto por la dislocación de las producciones que antes eran locales, como por el avance avasallador de las ventas directas al consumidor en grandes supermercados, desplazando formas más directas de relación productor-consumidor a nivel local.

Por todo esto, la protesta de las mujeres de Vía Campesina de ninguna manera es un acto local, sino que muestra al mundo lo que está oculto detrás de estos proyectos absurdamente llamados "forestación", diseñados para aumentar las ganancias de grandes multinacionales a costa de los recursos y la vida de las comunidades rurales.

*Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC. ALAI AMLATINA, 17/03/2008, México D.F-

---

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o **CAMBIO DE MAIL**:
http://listes.attac.org/sympa/info/attac-informativo
Importante : se debe aceptar el certificado de seguridad que aparece en el sitio

---

Enlaces recomendados:
http://www.noalamina.org/
http://www.noalapapelera.com.ar/portal/
